

8. Administración Económica, Financiera y Tributaria

8.1. Reclamos Salariales

Distintos sectores de agentes de la administración pública, ya sea en forma individual o a través de representantes gremiales (UNTER, UPCN) presentaron quejas contra los descuentos practicados en sus salarios, dispuestos por la Ley 2898 y los Decretos de Naturaleza Legislativa N° 1/97 y su modificatorio N° 5/97, que declararon la emergencia salarial y establecieron los porcentajes de la reducción. Solicitaban además la devolución de dichos descuentos.

También cuestionaban el llamado Aporte Extraordinario dispuesto por el art. 6 del Decreto de Naturaleza Legislativa 1/92, ratificado por la Ley 2502 y mantenido en vigencia por el Art.5° de la Ley 2999 (art.1°).

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de los interesados el fallo del Superior Tribunal de Justicia en el que se pronunciara por la legitimidad de la emergencia económica declara por ley y de las normas de reducción salarial dictadas en su consecuencia. También advertimos a los recurrentes que dicha sentencia se encuentra para su resolución en la Corte Suprema de Justicia en virtud de los recursos extraordinarios presentados por los actores.

En punto a la devolución del Aporte Extraordinario, derivamos cada uno de los reclamos a la Comisión creada por el Decreto de Naturaleza Legislativa N° 1/2001, que dispuso dejar sin efecto tal aporte, dado que esa Comisión tiene como función “ *conciliar los montos descontados en concepto de aporte de emergencia a partir del día 2 de mayo de 1996 hasta el 28 de febrero del 2001 con las erogaciones que generó la Unidad de Control Previsional en dicho período*” (art. 3°). Al mismo tiempo hicimos saber a los promotores de reclamos lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 4° de dicho Decreto. Es decir, rechazó la legitimidad de la devolución parcial y en Bonos de los importes descontados.

Sin embargo, dado que las disposiciones judiciales sólo se aplican a las partes del juicio, insistimos ante la Comisión referida para que indique el resultado de su gestión, siendo insatisfactorio el informe rendido en tanto al mes de Junio pasado, no había aún determinado los montos a favor de los agentes.

La Defensoría del Pueblo no tiene facultad para cambiar decisiones administrativas, mucho menos intervenir cuando sobre la cuestión planteada existen causas judiciales pendientes o cosa juzgada, por lo que en cada caso cumplimos con brindar asesoramiento a los interesados sobre las vías disponibles para el ejercicio de sus derechos (tipo de acción, plazos de prescripción, etc).

Ello no obsta a formular nuestras opiniones, y es por ello que nos hemos dirigido a las autoridades del Ministerio de Economía, recomendando que se trabaje intensamente en la recomposición salarial, convencidos de que la contribución que las familias de los agentes

públicos han hecho en el marco de la emergencia económica ha sido mayúscula y es hora de definir la mentada recomposición de sus ingresos.

8.2. Instituto Autárquico Provincial del Seguro – IAPS

El Instituto Autárquico del Seguro Provincial continua con los pagos de los beneficios a su cargo en varias cuotas, amparándose en el marco de la emergencia económico-financiera y en la Resolución 008/97 del Directorio del Instituto, que determina que los pagos que deban ser efectuados en razón de lo normado por la Ley 2.057, art.2, incs. a), c), d) y en especial para aquellos casos indicados en el inc. b) del mismo artículo- incapacidad total y permanente-, podrán ser realizados por la Tesorería del Instituto en cuotas, atendiendo al criterio de la antigüedad desde que la deuda sea exigible, como asimismo en función de la disponibilidad dineraria con que cuente la Tesorería del Instituto.

La Defensoría del Pueblo, no obstante, formuló una **Recomendación al IAPS** para que dispusiera el **pago del beneficio en una sola cuota** a un discapacitado total y permanente, mediante la **Resolución N° 340/03**, lo que fue tenido en cuenta por el Instituto.

A diferencia de lo informado en años anteriores, debemos destacar que en presente período se observa un regular cumplimiento del pago de las cuotas de los seguros de vida a cargo del Instituto.

8.3. Banco Patagonia S.A

El deber de colaboración

La intervención de la Defensoría del Pueblo en situaciones cuestionadas por los usuarios del servicio que presta el Banco Patagonia S. A., se vinculan exclusivamente a su calidad de **agente financiero del Estado Provincial**.

La entidad financiera señala en cada una de sus comunicaciones, que la misma no constituye parte de la denominada administración pública provincial, ni es una persona jurídica abarcada por la norma del art. 10 de la ley 2.765, sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo hicimos saber al Banco Patagonia S.A. que :

*“El deber de colaboración con el Defensor del Pueblo, es un imperativo legal que conforme al texto del art.12 de la ley 2.756 supone la obligación de todos los poderes públicos, **personas físicas y jurídicas, públicas o privadas** de “facilitarle las tareas de investigación y verificación y las medidas probatorias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados” (inc, b del artículo citado).*

No debe confundirse entonces, como lo hace la entidad bancaria cada vez que se ha dirigido a esta Defensoría del Pueblo en otros trámites, las materias, las facultades o el ámbito de competencia del Defensor del Pueblo que puede derivar en recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes funcionales, informes especiales a la Legislatura Provincial o bien acciones judiciales de carácter colectivo, con el deber de colaboración que las “personas físicas y jurídicas, públicas o privadas” deben prestar al Defensor,

pues tal dispositivo legal se funda en la necesidad de acercar elementos de juicio útiles a las investigaciones, a la búsqueda de la verdad real que pueda contribuir a encontrar soluciones a las demandas de los ciudadanos y que deban ser instrumentadas por los funcionarios bajo la órbita de competencias de esta institución y sobre los que se ejercerán las facultades conferidas al Defensor del Pueblo.”

En general el Banco ha contestado los reclamos de orden individual de los agentes estatales que se quejaron por conceptos indebidamente debitados de sus cuentas salariales, pero no ha sido igual su colaboración, como tampoco la búsqueda de soluciones, cuando se plantearon quejas de orden colectivo, a saber: falta de prestación del servicio bancario en localidades de la Línea Sur, incomodidades que sufren los pasivos al retirar sus recibos de haberes en Viedma, demoras en el pago de los BODEN 2008.

Nuestra intervención permitió corregir el dispar tratamiento de los **agentes estatales de Sierra Grande que no cuentan con una sucursal del Banco Patagonia**. Éstos debían usar el cajero del Banco de la Nación Argentina para operar sobre sus cuentas salariales y se les cobraba por cada transacción. Dado que el Convenio de Acreditación Automática de Haberes asegura hasta cinco movimientos libres de costos, exigimos se corrigiera la desigualdad apuntada, lo que así se hizo.

Pago de haberes a estatales de la Línea Sur

La queja de un grupo de agentes estatales activos de la localidad de Sierra Colorada que deben trasladarse a la localidad de Los Menucos para percibir sus salarios, devino en una investigación más amplia de la problemática y se hizo extensiva a otras localidades de la Línea Sur, y contempló también a los pasivos.

Recordemos que desde que se dispusiera el cierre de sucursales del agente financiero del Estado Provincial, muchas localidades de la provincia quedaron **sin cobertura del servicio bancario**, y una gran parte de ellas, ni siquiera es atendida por el transporte de caudales o por comisiones especiales del Banco Patagonia que se constituyen periódicamente para abonar sueldos o cobrar impuestos.

La posición de la Defensora del Pueblo, quedó expresada en la **Resolución N° 1.376/03**¹ en la que se formularon **Recomendaciones al Ministro de Economía** y al **Director de Comercio**, así como se insistió ante la ANSeS para que se ampliara la cobertura de pago de haberes previsionales a través del Correo Argentino, tema éste que había sido tratado en otras actuaciones iniciadas apenas se anunció el acuerdo con la empresa postal (Expte N° 3.289/03 De Oficio).

A la fecha el Director de Comercio Interior, quien fuera designado por el Ministerio de Economía para representar al Estado en las negociaciones con el Banco Patagonia, nos informó que se comenzarían a pagar los haberes a los agentes de las localidades de la Línea Sur, en su lugar de residencia, a partir del mes de diciembre del 2003.

¹ Ver Resolución N° 1.376/03 en el Apéndice

8.4. Dirección General de Rentas

Los contribuyentes no han generado numerosas quejas en el presente período y observamos que las distintas moratorias instrumentadas en los últimos años, más la aceptación de certificados de deuda pública para cancelar deudas impositivas propiciaron opciones a los interesados para el acceso a la regularización de sus deudas.

Ello no obstante se recibieron muchas consultas personales de aquellos contribuyentes que, en situación de mora grave, fueron ejecutados judicialmente o intimados previo al trámite del apremio. Los ciudadanos en tal situación uniformemente esgrimen haber sufrido la merma en sus ingresos, ya por los descuentos salariales del sector público, o por efecto de la crisis económica. Agregan entonces, que no han tenido la posibilidad de acceder a una cuota acorde a sus ingresos en los planes de refinanciación ofrecidos por la Dirección General de Rentas.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado a la DGR se contemple cada caso por separado, en procura de acercar los intereses de ambas partes, pues no propiciamos el incumplimiento de las obligaciones fiscales pero sí entendemos que la coyuntura de la emergencia económico financiera no sólo afecta al Estado, sino también a los bolsillos de contribuyentes.

En tal sentido, hemos encontrado muy buena disposición de las autoridades del organismo recaudador y sabemos que se atiende en debida forma al contribuyente. Efectivamente, la DGR ha receptado sugerencias de la Defensora del Pueblo para que se considere, por ejemplo, la aplicación retroactiva de los beneficios de la exención impositiva a aquellos contribuyentes desprevenidos que ignoraban estar alcanzados por tal beneficio.

Apéndice

RESOLUCIÓN N° 1.376/03 DPRN

Viedma, 16 de Octubre de 2003

VISTO: El Expediente N° 2690/03, caratulado “... S/ **empleados públicos solicitan cobrar haberes en Sierra Colorada**”, y

CONSIDERANDO:

I

Que las presentes actuaciones se iniciaron con el reclamo presentado por un grupo de 150 vecinos de Sierra Colorada quienes solicitan que los empleados públicos puedan cobrar sus haberes en la misma localidad, ya que a la fecha deben trasladarse a Los Menucos donde además soportan largas esperas para percibir sus salarios.

Que se solicitaron informes a la Dirección de Comercio Interior en virtud de su calidad de autoridad de aplicación de las previsiones de la ley 3669, la que contestó que al no contar con sucursal en Los Menucos, el Banco no solicitó la habilitación de los Registros de esa ley, estando “*eximida de hacerlo*” (sic).

Que por otra parte pusimos en conocimiento del reclamo al Banco Patagonia S.A., agente financiero del Estado Provincial, quien no respondió nuestra requisitoria.

Que tampoco obtuvimos respuesta del Ministerio de Economía, a pesar de haberse cursado pedido de informes al propio Ministro y reiterado a través del Subsecretario de Hacienda, **lo que constituye una conducta sistemática de esa cartera en todas las actuaciones iniciadas en esta Defensoría del Pueblo vinculadas a la problemática derivada del cierre de sucursales del Banco Patagonia S.A.**

Efectivamente, el Ministerio de Economía no sólo es renuente en responder a los cuestionamientos de los ciudadanos de las localidades de la Línea Sur afectadas por esa medida, quienes vienen presentado sus quejas desde el año 1997, sino que tampoco se han aportado soluciones a esas demandas.

Cuando se implementó la modalidad del transporte de caudales que visitaba las localidades de la Línea Sur para realizar algunas operaciones bancarias, pusimos en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Economía las quejas sobre la escasa frecuencia con que dicho servicio se prestaba y desde la Defensoría del Pueblo se recomendó se habilitaran otros medios para que los ciudadanos pudieran efectuar el pago de sus servicios o contribuciones, así como percibir sus haberes activos o pasivos.

El entonces Defensor del Pueblo se manifestó por Resolución N° 1365/98 en estos términos: “....sin perjuicio de otros pronunciamientos ya emitidos en temas conexos, en uso de las facultades conferidas por el Art. 167 la Constitución Provincial y la ley 2.756 en su Art. 27, se RECOMIENDA AL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL se arbitren las medidas necesarias para mejorar el servicio bancario en las localidades que no cuentan con sucursales del Banco Río Negro S.A. y en su caso, se busquen alternativas (convenio con municipios, gestiones ante la ANSeS, etc.) para que los ciudadanos puedan cancelar sus obligaciones con el Estado Provincial y cobrar sus haberes como activos y pasivos en el mismo lugar donde residen y/o prestan funciones”.

II

Las localidades de Sierra Colorada, Ramos Mexía y alrededores, han sido discriminadas desde que **sus habitantes ni siquiera cuentan con el servicio del transporte de caudales que va una o dos veces al mes a otros puntos de la región sur** y deben trasladarse varios kilómetros hasta Los Menucos, Ing. Jacobacci (pasivos) o San Antonio Oeste para poder cobrar sus salarios.

En punto a los pasivos, recientemente la ANSeS suscribió un convenio con el Correo Argentino, el que tiene ahora a su cargo el pago de los beneficios previsionales y cubre casi todas las pequeñas localidades rionegrinas, dándose así solución a una demanda insatisfecha durante varios años. Ello no obstante, **Sierra Colorada tampoco ha sido beneficiada, y los jubilados y pensionados deben hacer 190 km, para percibir sus haberes en Ing. Jacobacci, mientras que los de Ramos Mexía cobran en San Antonio Oeste.**

A modo de ejemplo de los padeceres de estos habitantes, el Sr. Intendente de Sierra Colorada nos indicó que los pasivos, muchos de avanzada edad, toman el colectivo por la mañana para ir hasta Ing. Jacobacci y deben esperar en la Estación de Trenes hasta las 21 hs que pasa el mismo servicio de transporte que los regresa a sus hogares.

Oportunamente, la Defensora del Pueblo inició actuaciones DE OFICIO (Expte. N° 3.289/03) y exhortó a la ANSeS para dispusiera la inclusión de todas las localidades de Río Negro que no cuentan con sucursales bancarias dentro del nuevo programa de pago implementado (Resol. N° 1.042/03DPRN del 7 de agosto del 2003).

En respuesta a tal pronunciamiento, la Gerencia de Pago de Beneficios de la ANSeS informó que se habían hecho los requerimientos al Correo Argentino para que habilitara agentes pagadores en otras localidades no incluidas inicialmente, habiéndose confirmado algunas futuras bocas de pago, a saber: Ing. Huergo, Chimpay, Coronel Belisle, Guardia Mitre, Los Menucos, Maquincabo, El Cuy; y respondiéndose negativamente con relación a: Contralmirante Cordero, Chelforó, Darwin, Luis Beltrán, Pomona, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Mengué, Aguada Guzmán.

De acuerdo con el informe de la ANSeS, la razón expuesta por el Correo Argentino S.A. para no incluir las localidades de referencia, es que las estafetas y Unidades Postales no están habilitadas para operaciones monetarias.

Creemos que corresponde a la ANSeS insistir con la habilitación de nuevas bocas de pago o bien buscar otras alternativas para los habitantes de las localidades distantes a varios kilómetros de las hoy habilitadas, tal el caso de los beneficiarios de Sierra Colorada que cobran en Ing. Jacobacci.

III

Por otra parte, no podemos dejar de hacer algunas reflexiones cuando nos enfrentamos, no sin frustración, a la realidad de ver que los justos reclamos de la población no son atendidos, y que nuestra intervención apenas alcanza para acompañar la denuncia, pues los involucrados en la implementación de soluciones ni siquiera contestan nuestras requisitorias.

En las presentes actuaciones, las autoridades del Banco Patagonia S.A., agente financiero del Estado Provincial, no respondieron el pedido de informes ordenado por la Resolución N° 523/03, y tal conducta remisa debe ser valorada - en función del artículo 12 de la ley 2.756- como un incumplimiento al **deber de colaboración con el Defensor del Pueblo**, principio éste muchas veces desinterpretado por la entidad.

El deber de colaboración con el Defensor del Pueblo, es un imperativo legal que conforme al texto del art.12 de la ley 2.756 supone la obligación de todos los poderes públicos, **personas físicas y jurídicas, públicas o privadas** de “facilitarle las tareas de investigación y verificación y las medidas probatorias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados” (inc, b del artículo citado).

No debe confundirse entonces, como lo hace la entidad bancaria cada vez que se ha dirigido a esta Defensoría del Pueblo en otros trámites, las materias, las facultades o el ámbito de competencia del Defensor del Pueblo que puede derivar en recomendaciones, sugerencias, recordatorios de deberes funcionales, informes especiales a la Legislatura Provincial o bien acciones judiciales de carácter colectivo, con el deber de colaboración que las “personas físicas y jurídicas, públicas o privadas” deben prestar al Defensor, pues **tal dispositivo legal se funda en la necesidad de acercar elementos de juicio útiles a las investigaciones, a la búsqueda de la verdad real que pueda contribuir a encontrar soluciones a las demandas de los ciudadanos y que deban ser instrumentadas por los funcionarios bajo la órbita de competencias de esta institución y sobre los que se ejercerán las facultades conferidas al Defensor del Pueblo.**

Es por ello, que entendemos necesario insistir ante al Banco Patagonia que brinde su valiosa colaboración, en tanto entidad que opera como agente financiero del Estado Provincial, informando a la Defensoría del Pueblo y aportando si lo entendiera oportuno, sugerencias que deban ser reencausadas hacia las autoridades públicas. En ésa inteligencia, y ninguna otra, hemos formulado nuestros requerimientos a fin de contribuir a superar problemáticas que consideramos merecen ser atendidas.

Nótese que los ciudadanos de Sierra Colorada plantearon en estas actuaciones que, además de no contar con servicios bancarios en su localidad, **tampoco son atendidos debidamente cuando se trasladan a Los Menucos, pues las denuncias indican que soportan largas esperas e incomodidades.**

IV

Párrafo aparte merece la falta de respuesta de las autoridades del Ministerio de Economía en las presentes actuaciones.

Sabemos que concomitante con nuestra intervención, el Intendente de Sierra Colorada, haciéndose eco del reclamo de sus habitantes, encaró acciones ante ese Ministerio, sin resultado positivo.

Huelga decir que el deber de colaboración hacia la Defensoría del Pueblo fue inobservado por las autoridades del Ministerio de Economía, pero más aún, están incumplidos otros deberes hacia la propia ciudadanía, pues sin perjuicio que la decisión tomada por el Banco Patagonia S.A. al reducir el número de sucursales en el interior de la provincia no puede imputarse al Estado Provincial, entendemos, como ya se ha dicho en anteriores pronunciamientos, que **le cabe una responsabilidad al Poder Ejecutivo de asegurar una mejor cobertura del servicio bancario a los ciudadanos rionegrinos que habitan pequeñas o medianas localidades de nuestro vasto territorio, algunas bastante alejadas de los centros con mayor población que cuentan con una sucursal del Banco.**

V

Asimismo, no encontrando satisfactoria la respuesta de la Dirección de Comercio Interior obrante a fs. 12, corresponde **RECOMENDAR al Sr. Director de Comercio Interior** que inste al Banco Patagonia S.A. al cumplimiento de las previsiones de la ley 3669, pues la normativa legal no exime de la responsabilidad de su observancia a la entidad financiera que, como en el presente supuesto, se constituye *ad hoc* en Los Menucos para el pago de haberes (cf. Art.44 bis in fine, Ley 2817, incorporado por la Ley 3669).

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO RESUELVE

PRIMERO: En uso de las facultades conferidas por el art. 27 de la ley 2.756, **RECOMENDAR al Sr. Ministro de Economía** realice las gestiones necesarias ante el Banco Patagonia S.A., en su calidad de agente financiero del Estado Provincial, para que se disponga el pago de salarios a los agentes activos de la localidad de Sierra Colorada en el

mismo lugar de residencia, sin perjuicio de la inclusión de otras localidades en idéntica situación.

SEGUNDO: Formular un **RECORDATORIO DE LOS DEBERES FUNCIONALES** al **Sr. Ministro de Economía** para que cumpla con el deber de colaboración con la Defensora del Pueblo, sin perjuicio de la obligación del art.27 de la ley 2.756 de contestar la Recomendación del Artículo Primero.

TERCERO: RECOMENDAR al Sr. Director de Comercio Interior inste el cumplimiento de la Ley 3669 al Banco Patagonia S.A. en ocasión de su constitución en Los Menucos conforme se indica en el Considerando V de la presente Resolución(art. 27 Ley 2.756)

CUARTO: Reiterar el pedido de informes ordenado en la Resolución N° 523/03 DPRN, al Banco Patagonia S.A. en carácter de colaboración.

QUINTO: Comunicar la presente Resolución a la ANSeS con pedido de informes ampliatorios.

SEXTO: Regístrese, Notifíquese y Archívese.